

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**



**SALA LABORAL**

**Acta N°230**

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Medellín, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA VIRGINIA ARROYAVE BEDOYA** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **PENSIONES DE ANTIOQUIA**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

**ANTECEDENTES**

**Pretensiones**

La demandante solicita que se declare la ineficacia de la afiliación al RAIS a través de **Protección S.A.**; y, en consecuencia, se indique que se mantuvo afiliada sin solución de continuidad al RPM administrado por **Pensiones de Antioquia**.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a **Protección S.A.** a trasladar todos los conceptos recibidos con motivo de la afiliación de la demandante.

## **Hechos**

Como fundamento de sus pretensiones indica que presta servicios al **Departamento de Antioquia** desde el **6 de abril de 1978** por lo que fue vinculada a **Pensiones de Antioquia**.

El día **10 de septiembre de 2009** se trasladó a **Colmena S.A.** hoy **Protección S.A.**, sin que antes de su vinculación se le realizara una asesoría personalizada o se le suministrara información acerca de las principales características del RAIS y sus diferencias con el RPM.

## **Respuesta Pensiones de Antioquia**

**Pensiones de Antioquia** a través de apoderada manifestó que es cierto que la demandante fue su afiliada y con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 se trasladó al RAIS administrado en la actualidad por **Protección S.A.**

En lo que refiere a las condiciones del traslado indica que las desconoce siendo este un hecho que le corresponde responder a la administradora del RAIS.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones presentadas en su contra y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, buena fe y exoneración del pago de costas procesales.

## **Respuesta Protección S.A.**

**Protección S.A.** por intermedio de apoderada manifestó que es cierto que la demandante se trasladó al fondo que administra el día **10 de septiembre del año 1999**, precisando que esa vinculación se realizó precedida de una asesoría integral y completa respecto a todas las implicaciones de su decisión, sin omitir información e indicando claramente todas las características, regulaciones del RAIS y su funcionamiento, así mismo los rasgos diferenciadores respecto al RPM señalando con total claridad que la forma de construir la pensión en uno y otro son distintas y excluyentes, sin que pueda hablarse de situación más ventajosa o desventajosa en uno y otro pues simplemente son regímenes diferentes y excluyentes.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de recursos públicos del sistema de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP e inexistencia de la obligación de devolver seguro previsional.

### **Sentencia de primera instancia**

El Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **16 de mayo de 2022, declaró** la ineficacia de la afiliación al RAIS, indicando que la actora se encuentra válidamente afiliada a **Pensiones de Antioquia**.

Como consecuencia de lo anterior, **ordenó** a **Protección S.A.** trasladar a **Pensiones de Antioquia**, todos los valores recibidos con motivo de la vinculación de la demandante, como es: lo acumulado en la cuenta individual de ahorros, cotizaciones completas, cuotas de administración, comisiones, aportes para la garantía de pensión mínima y cuotas de seguros previsionales con todos sus rendimientos.

Esta decisión no la compartió el apoderado de la administradora del RAIS, motivo por el cual la recurrieron en los siguientes términos:

### **Recurso Protección S.A.**

El recurrente solicita que se **revoque parcialmente** la decisión de primera instancia en lo referente con la devolución de gastos de administración y pagos realizados a las aseguradoras, esto por cuanto fue el legislador el que en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 facultó a las administradoras de pensiones para realizar estos descuentos.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que esa administradora de pensiones cumplió con su deber de administración y obtuvo unos rendimientos, los cuales se trasladaran a la administradora del RPM, sin que se deba trasladar lo recibido por gastos de administración por cuanto estos dineros deben ser conservados como restitución mutua en los términos del artículo 1746 del Código Civil.

En lo que refiere a lo pagado por las primas de seguros previsionales, señala que no es posible su devolución toda vez que estos dineros fueron pagados a un tercero de buena fe, que cumplieron con las prestaciones a su cargo.

En caso de que se confirme la condena a **Protección S.A.** se estaría condenando en perjuicios, sin que se cumpla con los presupuestos para imposición de una declaración en ese sentido.

Finalmente, señala que los gastos de administración son susceptibles de prescripción por ser cobrados de forma periódica y no estar destinados al reconocimiento de pensiones.

### **Alegatos de conclusión**

Corrido el término de traslado, no se presentaron alegaciones.

## **CONSIDERACIONES**

### **Problema jurídico**

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia conforme con los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) Determinar si el acto jurídico que generó el traslado de régimen de la demandante resulta o no eficaz, (ii) Establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de la declaratoria de ineficacia y (iii) revisar si operó la prescripción.

### **Pruebas relevantes**

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. La señora **María Virginia Arroyave Bedoya** fue afiliada a **Pensiones de Antioquia** el día **5 de diciembre de 1991** (04/pág.44).
2. La demandante suscribió formulario de vinculación a **Colmena S.A.** hoy **Protección S.A.** el día **10 de septiembre de 1999** (04/pág.21), afiliación vigente desde el **1 de noviembre de 1999** (07/pág.73).
3. Conforme se observa en la historia laboral expedida por **Protección S.A.**, la señora **Arroyave Bedoya** siempre ha permanecido vinculada al servicio del **Departamento de Antioquia** (07/pags.59-71).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

### **El precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional**

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado un nutrido precedente en materia de la obligación de información de los fondos de pensiones, siendo sus sentencias fundantes la 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, a las que ha seguido una copiosa producción al resolver recursos de casación en las sentencias SL1688 de 2019, SL4360 de 2019, SL4426 de 2019, SL2611 de 2020, SL2877 de 2020, SL-1217 de 2021 y SL-755-2022.

En las providencias citadas el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: (i) desde la fundación de las AFP, segundo momento, (ii) desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y (iii) a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS a través de a **Colmena S.A.** hoy **Protección S.A.** el día **10 de septiembre de 1999** (04/pág.21), lo que se corresponde con el primer momento, ciclo para el cual la jurisprudencia en interpretación del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 ha exigido la demostración por parte de las administradoras de pensiones del cumplimiento del deber entregar una información necesaria y transparente, conceptos que se explican en la sentencia SL-1452-2019 de la siguiente forma:

**Información necesaria:** consistente en la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un comparativo entre las vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

**Transparencia:** La AFP a través de su promotor debe comunicar a su potencial afiliado en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

El anterior deber trae en lo procesal una carga que recae en la administradora de pensiones, y es demostrar que suministró al posible afiliado una información calificada, en la que se expliquen los beneficios y desventajas del

cambio de régimen, para solo a partir de este conocimiento concluir que se garantizó su derecho al ejercicio de una libre selección de régimen pensional.

Sobre la **carga de la prueba** es importante la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada -la de que no recibió información- y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado.

En lo que respecta al caso de autos, **Protección S.A.** al dar respuesta a la demanda manifestó que entregó información al demandante en lo referente a las condiciones en que accedería a una eventual pensión de vejez, sin embargo, más allá de esta afirmación no se trajo al proceso prueba de que se entregó a la actora una información necesaria y transparente para la fecha de la suscripción del formulario de afiliación<sup>1</sup>, debiendo recordarse que la suscripción de este documento apenas implica que hubo un consentimiento libre de vicios<sup>2</sup> pero no informado.

Sobre las obligaciones que recaen en las administradoras de pensiones es bastante ilustrativa la sentencia SL-782 de 2021, donde la Corte Suprema de Justicia indicó que según su línea jurisprudencial se debe declarar la ineficacia cuando quiera que:

...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y

---

<sup>1</sup>En lo referente a la aplicación de la carga de la prueba se indicó en sentencia SL-081-2021, lo siguiente: “Por tal razón, si la parte actora alude a la ausencia de tal información, como ocurre en este caso, no es de su cargo demostrar tal omisión, pues corresponde a un hecho negativo. Por el contrario, es deber de la AFP traer a juicio los elementos de prueba que permitan establecer que, al momento de la afiliación, brindó las explicaciones suficientes y veraces sobre las consecuencias, beneficios y desventajas del traslado de régimen pensional. Así, si a la administradora se le adjudica el incumplimiento de su deber profesional y de no actuar con diligencia, entonces incumbe a ésta acreditar que sí atendió tales obligaciones. Además, es la entidad quien se encuentra en mejor posición probatoria para allegar los elementos de prueba requeridos para esclarecer hechos como los que aquí se discuten.”

<sup>2</sup> Sentencias SL-4426-2019, SL-782 de 2021 y SL-1743 de 2021.

en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que al no demostrar **Protección S.A.** que cumpliera con su deber de informar, la consecuencia es que la afiliación efectuada a este fondo devenga ineficaz de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, por lo que se **confirmará** el fallo consultado.

### **De la entidad que debe recibir a la demandante como su afiliada**

En el caso de autos, se encuentra que el juez de primera instancia al declarar la ineficacia, estableció como efectos de la declaración de la misma la demandante debería retornar a **Pensiones de Antioquia** fondo al que se encontraba vinculada para la fecha en que se trasladó al RAIS, orden que merece un análisis particular de cara a lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STL-8362 de 2022, en la que al resolver una tutela interpuesta por Pensiones de Antioquia recordó que en los casos de retorno de personas al RPM por declaratoria de ineficacia, su afiliación debe entenderse a **Colpensiones** en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 2527 de 2000, que establece, que cuando un afiliado a una caja de previsión pública que se desvincule del servicio de la entidad a la cual pertenece deberá afiliarse al ISS.

En este caso, la Sala encuentra que tal interpretación en los términos enseñados en la sentencia de tutela no es aplicable al caso concreto como quiera que la señora **María Virginia Arroyave Bedoya** tal y como lo certifica **Protección S.A.** siempre ha cotizado a través de la Gobernación de Antioquia, lo que implica que no se cumple lo dispuesto en el artículo 3° mencionado, puesto que nunca ha operado la desvinculación del servicio de la entidad pública y en ese orden al nunca haber estado vinculada a **Colpensiones** su regreso al estado inicial en virtud de la declaratoria de ineficacia, no puede ser a administradora diferente a **Pensiones de Antioquia**, por lo que en este aspecto se **confirmará** la decisión de primera instancia.

### **De los efectos de la ineficacia**

El Juez de primera instancia como consecuencia de la declaratoria de ineficacia condenó a **Protección S.A.** a trasladar a **Pensiones de Antioquia** todos los valores recibidos con motivo de la vinculación de la demandante, como es: lo acumulado en la cuenta individual de ahorros, cotizaciones completas, cuotas

de administración, comisiones, aportes para la garantía de pensión mínima y cuotas de seguros previsionales con todos sus rendimientos.

Esta condena es cuestionada por parte del apoderado de **Protección S.A.** bajo 3 argumentos generales (i) los gastos de administración y seguros previsionales se cobran por ministerio de la ley y por el cumplimiento de una gestión por lo que tienen derecho a conservarlos, (ii) la declaratoria de ineficacia no puede implicar la devolución de los gastos de administración, pues de aplicarse de forma irrestricta el artículo 1746 del Código Civil, esto llevaría a que no haya lugar al traslado de los rendimientos obtenidos y (iii) las sumas pagadas por seguros previsionales se encuentran en poder de las aseguradoras y cumplieron con su finalidad de cubrir las contingencias de invalidez y muerte.

Con el fin de dar respuesta a estos argumentos y de paso resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de **Pensiones de Antioquia**, es relevante recordar que en este caso se está aplicando la ineficacia, como respuesta jurídica del ordenamiento jurídico por la transgresión de un deber legal y ello implica, que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto, no produzca ningún efecto.

En ese orden, es importante hacer énfasis en lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4360 de 2019, en la que indicó que: la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una **ineficacia en sentido estricto**, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado.

Siguiendo esta enseñanza la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional y ello implica que la AFP que se benefició de ello traslade a **Pensiones de Antioquia**, todos los conceptos que recibieron, puesto que, los mismos serán utilizados para la financiación de la eventual pensión de vejez a la que tenga derecho la demandante.

La forma en que se debe interpretar el artículo 1746 del Código Civil, es bien explicada en la sentencia SL-2877-2020, en la que al respecto se expresó:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746



del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

En virtud de lo expuesto para la Sala es claro que durante el periodo en que la actora estuvo vinculada a la administradora del RAIS, se privó a **Pensiones de Antioquia** del cobro de los gastos de administración en su favor, y en ese orden el restablecimiento de las cosas a su estado inicial no puede perjudicar al fondo de naturaleza pública, porque precisamente con fundamento en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, esta entidad tiene derecho a recibir 3 puntos porcentuales del aporte por gastos de administración, concepto que no fue recibido como consecuencia del acto declarado ineficaz.

Finalmente, en lo que toca con lo pagado por primas de seguros previsionales, debe indicarse que tales pagos obedecieron a la vinculación declarada ineficaz y en tal sentido hay una disminución en el valor del porcentaje de debió corresponder a **Pensiones de Antioquia**, desmejora que debe asumir **Protección S.A.**, y es por ello que la jurisprudencia ha indicado que deben ser reconocidos con cargo a su patrimonio y debidamente indexados, siendo un claro ejemplo de esta tesis la reciente SL-755-2022.

Así las cosas, queda resuelto el recurso presentado por el apoderado de **Protección S.A.**, indicando que se desestima su solicitud, sin embargo, siendo este un aspecto conocido en el grado de consulta es necesario dejar algunos aspectos claros en lo referente a los conceptos que deben ser devueltos por las AFP del RAIS cuando se declara la ineficacia y en ese sentido, esta Sala a partir del precedente jurisprudencial a identificado los siguientes conceptos:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del

artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM<sup>3</sup>.

2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador<sup>4</sup>.
3. Los **gastos de administración**<sup>5</sup>, concepto consagra en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales, primas de seguros del Fogafín y la comisión correspondiente a la AFP por su gestión.

En lo referente al traslado de estos conceptos por parte de las administradoras del RAIS a las administradoras del RPM, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha encontrado 2 razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios<sup>6</sup>, (ii) la devolución debe ser plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones<sup>7</sup>.

4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup>Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

<sup>4</sup>Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

<sup>5</sup>Se deben asumir por el fondo de pensiones con cargo en su propio patrimonio y de forma indexada. En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

<sup>6</sup>Sentencia SL-4360-2019.

<sup>7</sup>Sentencia SL-2877-2020.

<sup>8</sup>En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL 2877-2020, CSJ SL-936-2021, CSJ SL-938-2021, CSJ SL-1410-2021CSJ y SL1442-2021.

A partir de lo explicado, encuentra la Sala que le asistió razón al juez de primera instancia al condenar a **Protección S.A.** a trasladar a **Pensiones de Antioquia** los gastos de administración y seguros previsionales por lo que se **confirmará** en este aspecto la decisión de primera instancia, sin embargo, con el fin de incorporar las precisiones realizadas en el presente fallo, se **adicionará** la orden de primera instancia, puesto que es necesario que la orden se cumpla en un término perentorio y se deban trasladar indexados los recursos devueltos por concepto de gastos de administración.

Por lo anterior el numeral segundo de la sentencia de primera instancia quedara del siguiente tenor:

**SEGUNDO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A.** a trasladar a **PENSIONES DE ANTIOQUIA** dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, los siguientes conceptos recibidos con motivo de la afiliación de la señora **MARÍA VIRGINIA ARROYAVE BEDOYA**: (i) El capital ahorrado en la cuenta individual de la demandante (ii) los rendimientos generados, (iii) los gastos de administración cobrados durante la vigencia de la vinculación a esa AFP, sin lugar a descontar valores por concepto de prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, dineros que deberán ser indexados al momento de su traslado y asumidos con cargo a su propio patrimonio; y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

#### **De la excepción de prescripción**

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. En este sentido se remite a la lectura de las sentencias SL-1688 de 2019, SL- 3202 de 2021 y SL 3199 de 2021.

Por último, refiere el apoderado de **Protección S.A.** en su recurso que los conceptos comprendidos dentro de los gastos de administración se afectan por el paso del tiempo y en ese sentido no es posible ordenar su traslado, pues han transcurrido más de 3 años desde su pago por parte del afiliado.

En lo que tiene que ver con este motivo de controversia debe indicarse que por tratarse de sumas que están llamadas a integrar el capital indispensable para la

consolidación y financiación de la prestación y, en consecuencia, ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidos a prescripción, tal y como lo enseñara la Sala Laboral de la Corte Suprema en la sentencia SL-1473 de 2021, por lo que en este punto se despachará desfavorablemente el recurso interpuesto.

### **Costas**

Costas en esta instancia a cargo de **Protección S.A.** por ser desfavorable el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 1) del artículo 365 del CGP. Las agencias a su cargo y en favor de la demandante se fijan en la suma **\$1'000.000**.

### **Decisión**

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín, el día **16 de mayo de 2022**, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA VIRGINIA ARROYAVE BEDOYA** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **PENSIONES DE ANTIOQUIA, MODIFICÁNDOLA** en los términos señalados en la parte motiva, en tal sentido el numeral segundo de la providencia, será del siguiente tenor:

**SEGUNDO: CONDENAR** a **PROTECCIÓN S.A.** a trasladar a **PENSIONES DE ANTIOQUIA** dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, los siguientes conceptos recibidos con motivo de la afiliación de la señora **MARÍA VIRGINIA ARROYAVE BEDOYA**: (i) El capital ahorrado en la cuenta individual de la demandante (ii) los rendimientos generados, (iii) los gastos de administración cobrados durante la vigencia de la vinculación a esa AFP, sin lugar a descontar valores por concepto de prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, dineros que deberán ser indexados al momento de su traslado y

Radicado 05001-31-05-009-2019-00688-01  
Radicado Interno: P138222  
Asunto: Confirma y adiciona sentencia

asumidos con cargo a su propio patrimonio; y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de **PROTECCIÓN S.A.** Las agencias a cargo de la sociedad recurrente y en favor de la demandante se fijan en **\$1'000.000.**

Lo resuelto se notifica por **EDICTO.**

### LOS MAGISTRADOS



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**

Radicado 05001-31-05-009-2019-00688-01  
Radicado Interno: P138222  
Asunto: Confirma y adiciona sentencia



**SECRETARÍA SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

<b>Proceso</b>	Ordinario
<b>Demandante</b>	María Virginia Arroyave Bedoya
<b>Demandado (s)</b>	Protección S.A. y Pensiones de Antioquia
<b>Radicado</b>	05001-31-05-009-2019-00688-01
<b>Decisión</b>	Confirma y adiciona sentencia
<b>Magistrado ponente</b>	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 18 de agosto de 2022 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 18 de agosto de 2022 a las 5:00pm

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**SECRETARIO**